

Sucesos en Argentina, período 1999-2003

Emmanuel Oga
Santiago Szulanski

Presidencia de De la Rúa

A raíz de los crecientes cuestionamientos hacia el gobierno de Carlos Menem, fundados sobre todo en la corrupción y la incapacidad de combatir del flagelo de la desocupación, fue surgiendo una fuerza política conformada a partir de un acuerdo entre la Unión Cívica Radical (UCR) y el Frepaso, una confederación formada por los partidos Frente Grande, Socialista Popular, Socialista Democrático, Intransigente y Demócrata Cristiano. En 1997 se concretó esa unidad mediante la creación de la "Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación", más conocida como "Alianza".

De sus filas salió la fórmula Fernando de la Rúa- Chacho Álvarez, ganadora de la elección presidencial celebrada el 24 de octubre de 1999 con el 48,5 % de los votos, y una ventaja de 10,5 % sobre el oficialista Eduardo Duhalde.

El 10 de diciembre, la fórmula aliancista asumió el poder en un clima de esperanza, incluso entre muchos de los que no la habían votado. Sin embargo, ya desde el discurso de asunción, De la Rúa comenzó a socavar su base política, anunciando la necesidad de una serie de subas de impuestos y ajuste de la estructura estatal de considerable magnitud.

El gabinete de ministros, a la postre extremadamente inestable, estuvo compuesto, entre otros, por José Luis Machinea en el Ministerio de Economía, Ricardo López Murphy en Defensa, Adalberto Rodríguez Giavarini en Relaciones Exteriores, Juan José Llach en Educación. Era un gabinete integrado por radicales, frepasistas e incluso cavallistas, y con gran cantidad de economistas.

La situación argentina en materia económica y social era muy delicada: una desocupación que ya superaba holgadamente el 15 % y que subía implacablemente, inseguridad en las calles, desconfianza de parte de los mercados financieros internacionales y una voluminosa deuda externa eran algunos de los principales temas urgentes a tratar en la agenda del gobierno.

Desde el Ministerio de Economía se habían trazado ciertas medidas financieras, tendientes a encauzar el déficit fiscal, buscando principalmente el beneplácito del Fondo Monetario Internacional (FMI) para adelantar un nuevo empréstito. El gobierno se comprometía a mantener la Ley de Convertibilidad, que ordenaba que un peso tuviera el valor de un dólar.

A partir de febrero de 2001 grandes flujos de fondos empezaron a abandonar el país. Al mes siguiente asumió como Ministro de Economía López Murphy, pero fue repudiado por la oposición, e incluso por los propios radicales, al anunciar el arancelamiento universitario. Tras la renuncia de López Murphy, y en una sorprendente decisión, el gobierno nombró como Ministro de Economía a Domingo Cavallo, hasta entonces identificado por la opinión pública como un símbolo del gobierno de Menem.

El 1 de diciembre de 2001, Cavallo toma la decisión de imponer el corralito, un paquete de medidas económicas que impuso una bancarización total de la economía, mediante la prohibición de extraer dinero en efectivo depositados en bancos públicos y privados. Esta

medida, que afectó en gran medida a las clases medias, sumó apoyos en los mercados y organismos financieros internacionales, pero la población comenzó a manifestar un enorme descontento.

Hacia mediados del mes de diciembre se produjeron algunos estallidos entre las clases populares de algunas ciudades de las provincias, llevados adelante por los denominados piqueteros. Concretamente, varios comercios de zonas empobrecidas del interior del país sufrieron saqueos por parte de sectores de la población desocupadas e indigentes.

Algunos analistas políticos atribuyen estas revueltas a un plan desestabilizador orquestado por algunos líderes del Partido Justicialista.

El Cacerolazo.

A partir del día 19 de diciembre de 2001 se produjeron las manifestaciones populares conocidas como el cacerolazo, en las que la gente se agrupaba golpeando ruidosamente cacerolas. Durante ese día se produjeron graves disturbios y revueltas sociales en diferentes puntos de país, con epicentro en la ciudad de Buenos Aires. Durante los graves enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales, de los cuales fueron los más violentos los que tuvieron lugar en las inmediaciones de la Casa de Gobierno, perdieron la vida al menos 5 personas.

Frente a este panorama, el presidente decidió anunciar por cadena nacional que había decretado el estado de sitio, que suspendía las garantías constitucionales de los ciudadanos. Espontáneamente, miles de personas se lanzaron a las calles, disgustados con las recientes medidas civiles y económicas. Pacíficamente, la población manifestó su descontento durante toda la noche, mientras la policía intentaba alejarlos de la Casa de Gobierno, utilizando gas lacrimógeno; esa noche renunciaba el Ministro de Economía Domingo Cavallo.

El día 20 de diciembre se produjeron nuevos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes reunidos en la Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno, y en otros puntos del país. Esta vez, se calcularon en 30 los muertos por los diferentes enfrentamientos.

A las 4 de la tarde, visiblemente debilitado, el presidente pronunció un discurso por televisión convocando a la "unidad nacional" y ofreciendo al justicialismo cogobernar el país. Ante la respuesta negativa de parte de éste y la enérgica repulsa popular, el presidente Fernando de la Rúa presentó su renuncia.

Asume la presidencia de la Nación en forma interina el presidente provisional del Senado, Ramón Puerta. El día 23 de diciembre se reúne la Asamblea Legislativa, que nombra como presidente provisional de la Nación al hasta entonces gobernador de la provincia de San Luis por el Partido Justicialista, Adolfo Rodríguez Saá. En su discurso en el Congreso de la Nación, el flamante presidente anuncia el "default", o cesación de pago de las obligaciones por préstamos a los diferentes organismos internacionales de crédito, y a particulares que tuviesen en su poder títulos de la deuda pública argentina.

Sucesiones Presidenciales

Una serie de nuevos enfrentamientos, en Casa de Gobierno y en el Congreso Nacional entre algunas facciones más radicales de los manifestantes que continuaban acercándose a los edificios de gobierno, y las fuerzas de seguridad, ponen nuevamente en jaque la estabilidad de este nuevo gobierno. Se oyen repulsas contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia, contra miembros del nuevo gabinete, y contra senadores y diputados, que no contaban con el apoyo popular. El lema más recordado de los manifestantes era el "que se vayan todos", que resumía el descontento que sufrían las gruesas mayorías de la población, respecto de la clase dirigente. Algunos enfrentamientos tuvieron lugar dentro del palacio del Congreso de la Nación y se produjeron pequeños incendios y rotura de cristales y mobiliario. Sin el apoyo de importantes gobernadores, aún de algunos de su mismo partido político, el efímero presidente de la Nación, Rodríguez Saá decide presentar su renuncia al cargo, hacia el día 30 de diciembre.

Asume la presidencia en forma interina el hasta entonces presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño. El Partido Justicialista propone a Eduardo Duhalde como presidente provisional. El 31 de diciembre la Asamblea Legislativa aprueba la propuesta por gran mayoría, y Duhalde asume el cargo el día 2 de enero de 2002. Pocos días después de su acceso al poder, el nuevo primer mandatario dispuso sus primeras medidas para hacer frente a la crisis económica: abandono del tipo cambiario fijo, devaluación del peso, pesificación de la economía (incluidos depósitos bancarios) y la distribución de planes sociales para atenuar los efectos de una economía en recesión y había incrementado la pobreza e indigencia hasta índices nunca vistos antes en la Argentina.

En abril de 2002, el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, dimitió ante las protestas suscitadas por el denominado "Plan Bonex", que preparaba junto a Duhalde para canjear por bonos de deuda pública los depósitos bancarios a plazo inmovilizados. Los demás miembros del gabinete pusieron también sus cargos a disposición del presidente, el cual aceptó, entre otras, la renuncia del jefe de gobierno, Jorge Capitanich, y designó titular de Economía a Roberto Lavagna; quien anunció que no se produciría el retorno a un tipo de cambio fijo (siguiendo así las recomendaciones del FMI) y que persistirían las restricciones bancarias. El gobierno vio cumplidos algunos de sus principales objetivos en junio: el Senado derogó la llamada Ley de Subversión Económica, se acordó un pacto fiscal con los gobiernos provinciales para reducir en un 60% su déficit, y se dispuso un nuevo Plan Bonos. Pero el eje del programa gubernamental, cumplir las exigencias del FMI para recuperar su ayuda económica, generó todo tipo de actitudes opositoras y agudizó la conflictividad social. Pese a que la crisis continuó, el gobierno intentó normalizar progresivamente el sistema financiero; en noviembre de 2002, casi un año después de su implantación, finalizaron las restricciones para retirar efectivo de cuentas corrientes (acababa así el llamado "corralito"), y en marzo de 2003 se levantaron las limitaciones para retirar fondos de depósitos a plazo fijo (el denominado "corralón").

El 26 de junio de 2002, se produce la Masacre de Avellaneda en el que el gobierno nacional ordenó la represión de una manifestación de grupos piqueteros. Ante este hecho Duhalde anticipó seis meses el llamado a elecciones presidenciales y anunció que no iba a volver a presentarse.

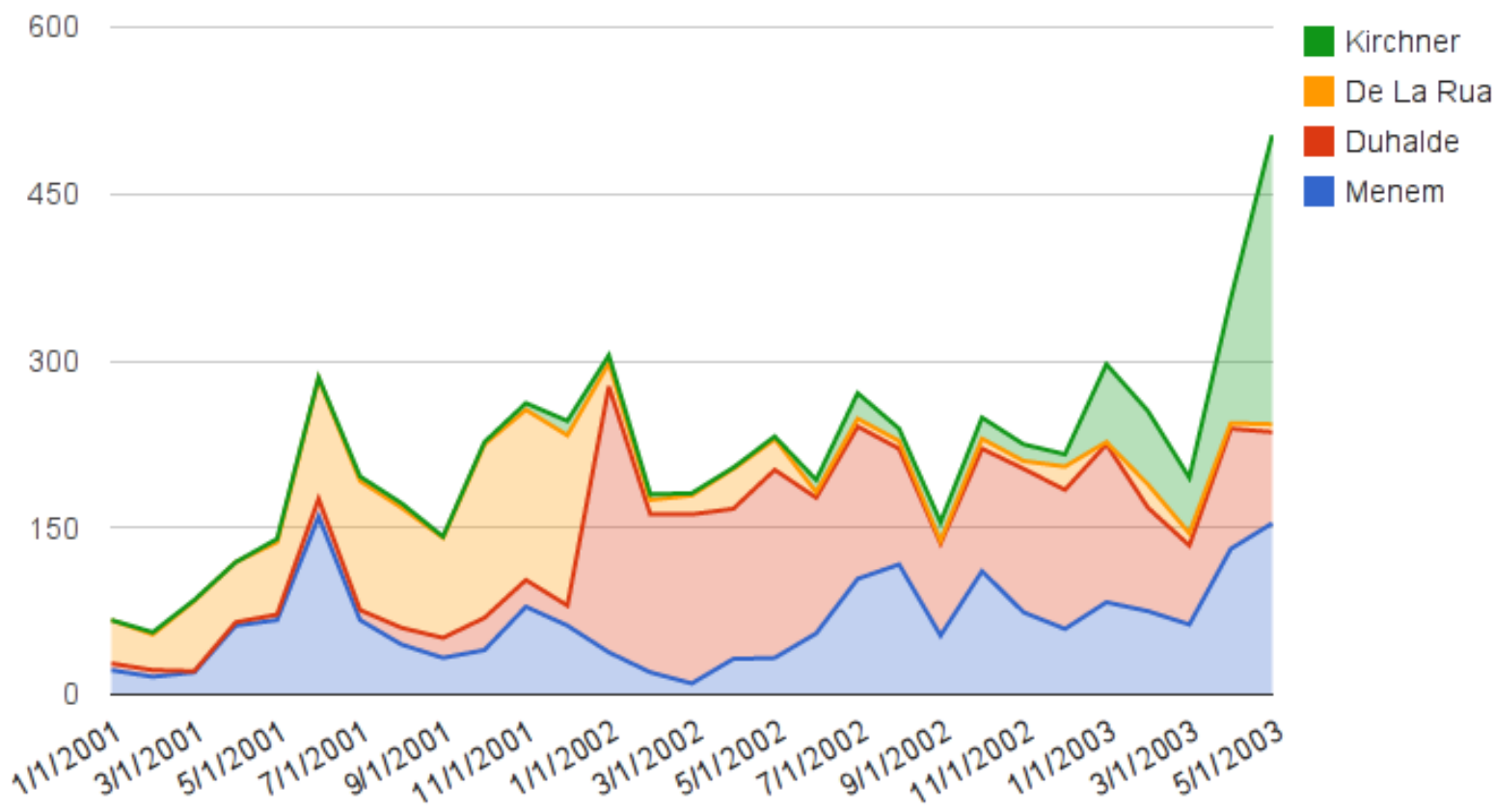
Elecciones y presidencia de Kirchner

El 27 de abril de 2003 se realizó la primera vuelta de elecciones para elegir presidente. Cinco candidatos reunieron la mayoría de los votos: Carlos Menem (24%), Néstor Kirchner (22%), Ricardo López Murphy (16%), Adolfo Rodríguez Saá (14%) y Elisa Carrió (14%).

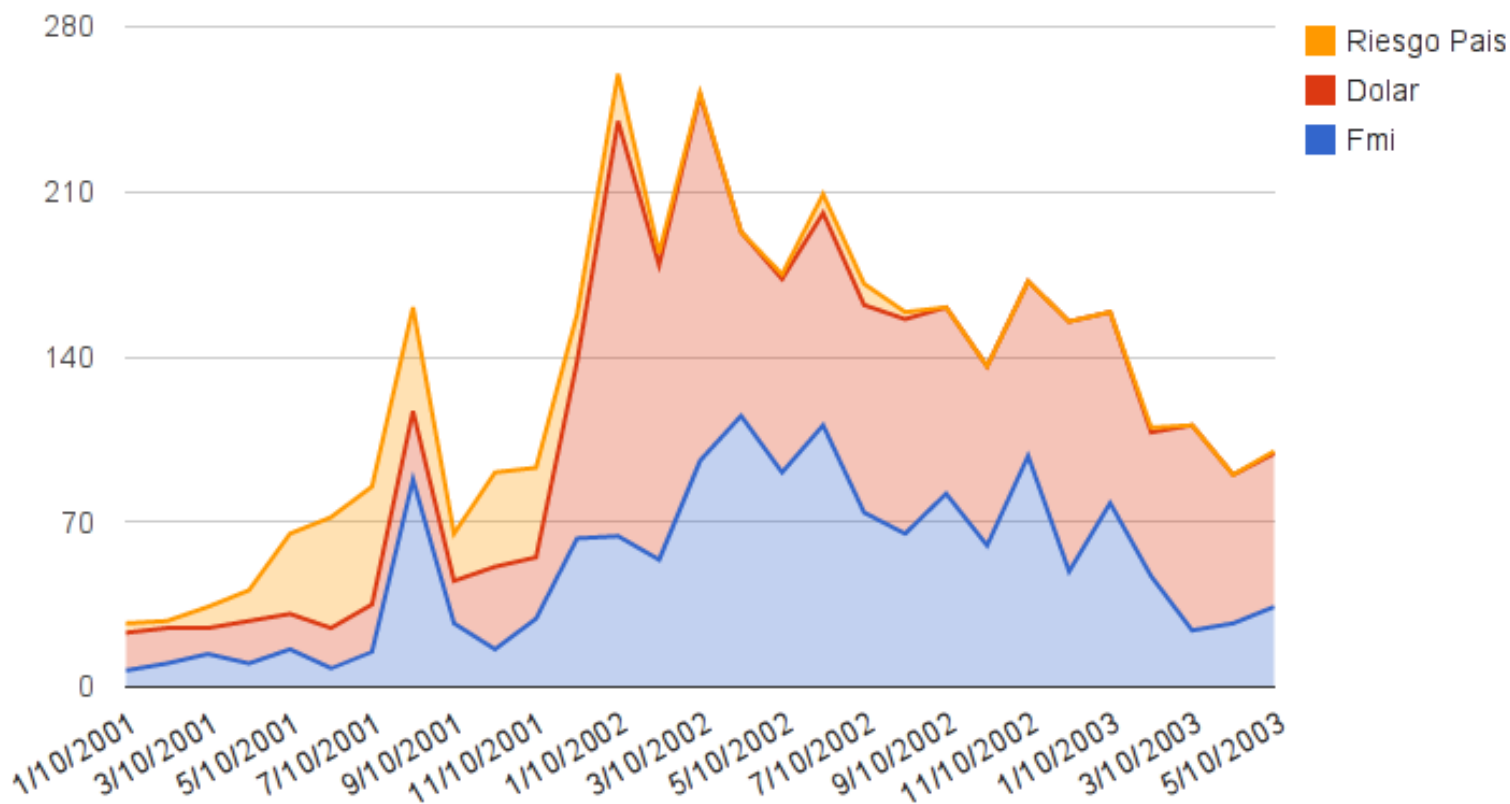
Carlos Menem, el candidato triunfante por mayoría relativa en la primera vuelta, no se presentó a la segunda vuelta al conocer los resultados de las encuestas que señalaban un porcentaje de sufragios en su contra del 70% y por lo tanto resultó elegido el presidente Néstor Kirchner, quien asumió su mandato el 25 de mayo de 2003 hasta el 10 de diciembre de 2007.

Kirchner asumió confirmando al ministro de economía de Duhalde, Roberto Lavagna, y su política económica siguió los mismos lineamientos que la de su antecesor, manteniendo la devaluación de la moneda mediante una fuerte participación del Banco Central en la compra de divisas, impulsando mediante las exportaciones un crecimiento económico con tasas del PBI cercanas al 10%. Por otro lado logró sacar al país de la cesación de pagos, canjeando deuda por nuevos bonos indexados por la inflación y el índice de crecimiento económico. Los índices de pobreza y de desempleo disminuyeron notoriamente.

Titulares del diario La Nación



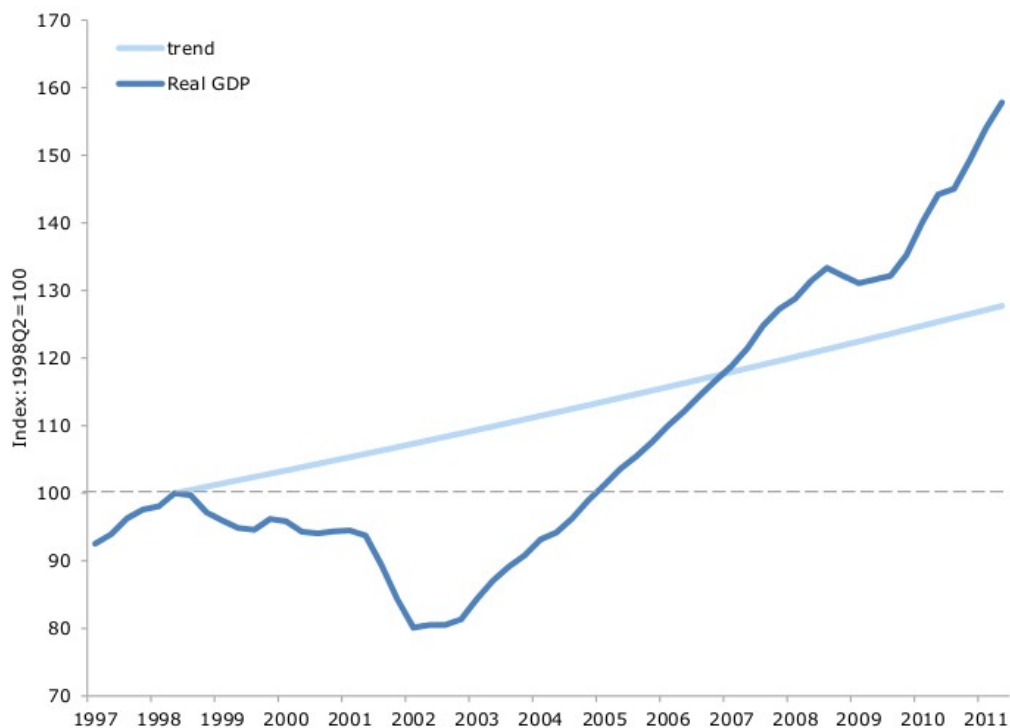
Titulares del diario La Nación



Consecuencias económicas del fin de la convertibilidad, 2001 en adelante

A principios de enero de 2002 poco tiempo después de la declaración unilateral de cesación de pagos de la deuda externa y de la sucesión de cinco mandatarios presidenciales no menos de dos semanas, con la sanción de la Ley 25.561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario se formalizó la denirada sakuda dek régimen de convertibilidad. En los últimos días de 2001 una masiva movilización popular, violentamente reprimida, había exigido cambios radicales en la institucionalidad gubernamental, así como en las orientaciones estratégicas de las políticas públicas, en el esquema de caja de conversión y, en suma, en el propio “modelo financiero y de ajuste estructural” gestado y consolidado de la mano del neoliberalismo.

FIGURE 1
Real GDP: Actual and 20-Year Trend (Seasonally-Adjusted)



Source: INDEC 2011a, IMF 2011b and Authors' Calculations.

Para ese entonces la Argentina atravesaba una de las crisis más profundas y prolongadas de su historia, que entre otros aspectos se reflejaba en casi cuatro años consecutivos de recesión económica y acentuada retracción industrial signadas por una intensa centralización de capitales, en los dramáticos niveles de pobreza e indigencia, en las elevadísimas tasas de desocupación y subocupación de la fuerza de trabajo, así como en su déficit fiscal insostenible, y en crecientes desequilibrios en el sector externo agudizados por una fuga de capitales muy pronunciada. Todo ello, acompañado de recurrentes renegociaciones de una deuda externa impagable, tanto en los términos en los que había sido acordada como en sus numerosas y opacas renegociaciones posteriores. Ese cuadro crítico y por demás regresivo se veía agravado por la existencia de fortísimas disputas dentro de los sectores dominantes respecto de las “formas” que debía asumir la “solución” de la crisis terminal de la convertibilidad, que se expresaron en el debate “devaluación versus dolarización”.

Ese conflicto se había hecho cada vez más explícito desde 1998, en forma contemporánea con el ingreso de la economía doméstica en la fase recesiva y las devaluaciones dispuestas en varios países asiáticos y Brasil, y se agudizó en los años siguientes hacia fines de 2001, cuando la movilidad social preanunció el fin del patrón convertible.

Los sectores que impulsaban la dolarización de la economía la presentaban como una suerte de “fase superior” de la convertibilidad, y se encolumnaron detrás de las corporaciones transnacionales ligadas fundamentalmente a la prestación de servicios públicos y el sistema financiero. En caso de concretarse la propuesta, estos grandes capitales podrían preservar o potenciar el valor en “moneda dura” de sus activos, sus ingresos y sus rentabilidades.

futuras, tal como habia acontecido bajo el regimen de caja de conversion. Por su parte, aquellos que propugnaban la "salida devaluatoria" impulsaban el incremento o la liberalizacion del tipo de cambio, asentandose en sus tenencias de activos en el exterior y sus posibilidades de posicionarse convenientemente en el mercado mundial a partir de las exportaciones de bienes con ventajas comparativas estructuradas sobre la base de la dotacion local de recursos naturales y, devaluacion mediante, un reducido costo laboral en términos internacionales.

En este subconjunto se alinearon no solo algunos grandes grupos economicos de capital nacional y extranjero con importante presencia en el sector manufacturero, sino tambien diversos actores de la produccion primaria con posibilidades de incrementar radicalmente sus excedentes, en tanto sus costos locales, en especial los salariales, muy dificilmente acompanarian el ritmo devaluatorio, como quedo sobradamente demostrado (en abril 2002 el dólar llego a cotizarse a cuatro pesos).

Cabe destacar que esta propuesta conto con el respaldo de amplias capas de la sociedad a partir de la conformacion de una alianza heterogénea entre diversos sectores empresarios, politicos, academicos y sindicales que se estructuro, en lo ideológico—discursivo, alrededor de la defensa de categorias muy caras a la tradicion del movimiento popular en la Argentina ("industria", "produccion y trabajo", "burguesia nacional", "nacion", etc.).

En definitiva, se trataba de una puja entre dos fracciones del poder económico que en la década de 1990 habian resultado ampliamente favorecidas por la liberalización comercial y financiera, el desmantelamiento del Estado, la desindustrialización y la reprimarización y la regresion del aparato productivo-manufacturero. Y que, frente al agotamiento del "modelo financiero y de ajuste estructural" y la imposibilidad de transferir la totalidad de los costos de la crisis sobre los sectores populares, procuraban que fuera la otra fracción la que asumiera los remanentes. Asi, la magnitud de la crisis socioeconomica y politico-constitucional imposibilitaba la conformación de una nueva "comunidad de negocios" que aglutinara politica, ideologica y economicamente a los distintos sectores del gran capital local, como habia sido posible a comienzos de los años noventa. En ultima instancia, lo que estaba en discusion era si la forma en que se saldria del regimen de convertibilidad derivaria en el mantenimiento o la modificación del mapa de ganadores y perdedores dentro de los sectores dominantes. No obstante la agudeza del conflicto, las propuestas de los grupos contendientes tenian un denominador comun: cualquiera fuera la solucion, la caida de los ingresos de los trabajadores, y mas ampliamente de los sectores populares, debia constituirse en el factor preponderante.

Ante ese escenario estructural y las apuestas estrategicas de los diferentes factores de poder económico, la salida del esquema convertible no podia resultar sino traumatica y profundamente regresiva. Los bruscos e intensos cambios en la estructura de precios relativos de la economia, incluyendo sobre todo el tipo de cambio y los ingresos de los asalariados, desembarcaron en convulsionados reacomodamientos en diferentes sectores de actividad, una profunda crisis económica. En suma, un por demas crítico año 2002, que expresó, en toda su intensidad, el punto de quiebre de la hegemonia de la valorización financiera y el ajuste estructural, asi como el transito hacia un nuevo, impreciso y aun incierto regimen de acumulación que hasta el momento ha tenido en el llamado dólar "alto" o "competitivo" su pilar constitutivo esencial.

En efecto, una de las características sobresalientes de la posconvertibilidad es que la principal "política" hacia el sector manufacturero ha sido el sostenimiento de una moneda nacional devaluada, por lo que puede afirmarse que desde 2002 no ha existido en el país una estrategia de desarrollo productivo en general ni industrial en particular. De lo que se sigue que, para los defensores del actual esquema macroeconómico, el "dólar alto" constituye una condición necesaria y suficiente para avanzar en la reindustrialización y la reversión de muchos de los legados críticos de la etapa 1976-2001. Así, la lógica del "piloto automático" tan cara al neoliberalismo parecería seguir vigente, esto es, la idea de que la instrumentación de una "adecuada" política macroeconómica es la condición para resolver los problemas heredados, y que casi no se precisan políticas activas si "la macro funciona bien" y "los precios son los correctos".

Una vez transcurrido el crítico año 2002, particularmente su primer semestre, que estuvo signado por bruscas alteraciones en los precios relativos, fueron sentándose las bases para el surgimiento de nuevos senderos evolutivos en la economía doméstica y de los distintos sectores de actividad, básicamente a raíz de la vigencia de un tipo de cambio "alto" y el desplazamiento de la especulación financiera como núcleo aglutinante del modelo de acumulación. A partir de allí y hasta 2007, la economía en general y la industria en particular revelaron un acelerado y sostenido ritmo de crecimiento que permitió revertir el prolongado proceso de desindustrialización desencadenado desde la última dictadura militar.

Al respecto, numerosos analistas han señalado reiteradamente que la industria logró ingresar en una Etapa de crecimiento ininterrumpido e inédito en la historia argentina gracias a una política sustentada en "dólar alto". Indudablemente, luego de largos años de desindustrialización y reestructuración regresiva del sector, la acelerada recuperación fabril registrada durante el quinquenio 2003-2007 no deja de ser un dato a ser resaltado. No obstante, para dimensionar en su justa medida tales logros cabe destacar que recién en 2005 lograron superarse los registros del año 1998 -tanto a lo relativo al PBI total como al del sector fabril—, cuando se inició la prolongada fase recesiva que culminó en el estallido de la convertibilidad.

Bibliografía

- Historia Argentina [http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_argentina]
- Hecho en Argentina, industria y economía, 1976-2007, Daniel Azpiazu y Martín Schorr, Siglo Veintiuno Editores, 2010.
- Gráficos titulares La Nación: elaboración propia, a partir del archivo online [<http://servicios.lanacion.com.ar/archivo>].